

Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que se ordenó dar cuenta conforme lo disponen los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la parte denunciada contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que acogió la denuncia y condenó a don Manuel Alegría Rizzo al pago de una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales, en su calidad de armador de la nave, y a don José Salazar Salazar a la suspensión los derechos derivados de la inscripción en el registro pesquero artesanal, como patrón de la misma.

**En cuanto al recurso de casación en la forma:**

**Segundo:** Que la parte recurrente alega como causal de nulidad formal la del artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 N°4 del mismo código. Al efecto, denuncia que la judicatura omite la explicación de cómo estableció los hechos que constituyen la infracción denunciada y que no contiene un fundamento alguno de la decisión.

**Tercero:** Que según prescribe la norma contenida en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 766 del mismo Código, en los juicios regidos por leyes especiales, como ocurre en la especie, en que el procedimiento sumario especial se encuentra previsto y regulado en los artículos 125 y siguientes de Ley General de Pesca y Acuicultura, no procede el recurso de casación en la forma por la quinta causal del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento en lo Civil, por faltar los requisitos contemplados en el número 4 del artículo 170 del mismo cuerpo de leyes.

**Cuarto:** Que, en estas condiciones, considerando el preciso vicio que la parte recurrente atribuye a un fallo que ha recaído en un procedimiento especial, solo corresponde concluir que el recurso de casación formal intentado, del modo en que se propuso, no puede prosperar.

**En cuanto al recurso de casación en el fondo:**

**Quinto:** Que la parte recurrente alega infringidos los artículos 125 N°1 y 4 de la Ley General de Pesca y Acuicultura y en relación con el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República y el artículo 116 de la referida ley. Asegura que no se han explicitado qué principios de la lógica, máximas de la experiencia o conocimientos científicamente afianzados justifican la decisión, limitándose a detallar diversos medios de prueba allegados y amparándose en la presunción



legal de la veracidad de la denuncia, pero sin valorar la prueba testifical por ella rendida que, a su juicio, satisfacer el estándar probatorio exigido.

Destaca que todo el razonamiento se sustenta en la presunción de veracidad, la enunciación de antecedentes documentales y la falta de prueba de los denunciados, lo que, asegura, resulta insuficiente para acoger la denuncia.

Finalmente, denuncia que, al imponer simultáneamente una multa al armador de la nave y la suspensión temporal de los derechos derivados de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal por tres meses, se infringe el principio *no bis in idem* y lo previsto en el artículo 116 de la Ley General de Pesca y Acuicultura

**Sexto:** Que la sentencia impugnada tuvo por establecidos los siguientes hechos:

1. Con fecha 21 de marzo de 2018 la embarcación denunciada desembarcó la cantidad de 80.43 toneladas de recursos pesqueros.
2. El 2 de abril de 2019 la misma nave desembarcó la cantidad de 80.05 toneladas de recursos pesqueros.
3. Luego, el 3 de abril de 2019, la referida embarcación desembarcó la cantidad de 80.02 toneladas de recursos pesqueros.

Sobre la base de estos antecedentes acogió la denuncia, fundado en lo dispuesto en el artículo 2 N°14 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que dispone que *“Por reglamento se establecerán categorías de embarcaciones artesanales por eslora. Asimismo, se determinará para cada categoría, su capacidad de carga máxima y el volumen máximo de bodega, según corresponda al arte de pesca, teniendo en consideración la explotación racional de los recursos hidrobiológicos. En todo caso, la capacidad de carga máxima por viaje de pesca de la categoría correspondiente a la mayor eslora, no podrá exceder de 80 toneladas.*

*En el evento que sea constatada la operación de una embarcación artesanal que no cumpla lo dispuesto en el reglamento antes mencionado en relación a su volumen, se suspenderán sus actividades extractivas quedando prohibido el zarpe de la embarcación infractora hasta que se certifique la adecuación de sus características a dicho texto.*

*Si se constata por tres veces, en el plazo dos años, que una embarcación artesanal ha desembarcado capturas que exceden la capacidad máxima por viaje de pesca, se suspenderán los derechos derivados de la inscripción en el registro*



*pesquero artesanal por el plazo de tres meses, quedando prohibido el zarpe de la embarcación infractora desde que se comuniqué dicha circunstancia.”*

Agrega que el artículo 107 de la Ley General de Pesca y Acuicultura prohíbe capturar, extraer, poseer, propagar, tener, almacenar, transformar, transportar y comercializar recursos hidrobiológicos con infracción de las normas de la referida ley.

En este escenario, advirtió que “(...) *la prueba allegada a estos autos por la denunciada no logró desvirtuarse la presunción simplemente legal contenida en el artículo 125 N°1 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en razón que, de la declaración de los testigos presentados por la parte denunciada no puede colegirse de manera precisa la existencia de elementos externos que provocaran un aumento de la carga por razones inimputable al denunciado, lo que se concluye a raíz de que los deponentes Francisco Gaete Cárdenas y Rafael Riquelme Araya, al aludir a la existencia de agua presente en la carga o a los restos de carga procedente de otras embarcaciones, deja entrever que tales hechos son de habitual ocurrencia en el rubro o son factores que pudieron incidir en el pesaje final, pero no precisan si les consta o no que tales hechos ocurrieran efectivamente en los desembarques de la nave “LUCAS I”, de fecha 21 de marzo de 2018, y de fechas 2 y 3 de abril de 2019.”*

A su vez, descartó la defensa consistente en que la embarcación no podía transportar más de 80 toneladas de carga, sobre la base de que para acreditar tal circunstancia “(...) *la denunciada acompañó a folio 54 un documento denominado informe técnico sobre capacidad de bodega de la lancha motor LUCAS I, tal antecedente corresponde únicamente a un instrumento emanado de un tercero, el cual no tiene el carácter de un peritaje técnico propiamente tal, razón por la cual no cuenta con el mérito probatorio suficiente para modificar lo razonado precedentemente.”*

**Séptimo:** Que del examen de libelo se observa que, aun cuando se invoca infringida la norma reguladora de la prueba que contiene el artículo 125 N°4 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el recurso se limita a cuestionar la ponderación de aquella y su insuficiencia para corroborar la presunción legal, pretendiendo que se den por establecidos los hechos que propone, a saber, un tonelaje de extracción distinto al asentado, cuestión que, como esta Corte ha señalado reiteradamente, escapa del control de un recurso de casación en el fondo, pues sólo la judicatura del grado se encuentra facultada para fijar los



hechos de la causa y que, efectuada correctamente dicha labor, esto es, con sujeción a las denominadas reglas de apreciación conforme a la sana crítica, resultan inalterables para este tribunal, de acuerdo lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, cuanto a la infracción del *principio non bis in idem*, cabe precisar que el artículo 116 de la Ley General de Pesca y Acuicultura prescribe la posibilidad de sancionar con multas las infracciones de las normas de la citada ley y sus reglamentos, o de las medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad, que no tuvieren prevista una sanción especial, lo que debe relacionarse con la prohibición dispuesta en el artículo 107 de la ley, cuya infracción también fue acreditada en la especie.

**Octavo:** Que, entonces, no advirtiéndose infracción alguna a dichas reglas, este recurso también será desestimado en esta etapa de tramitación, por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, se declara **inadmisible** el recurso de casación en la forma y se **rechaza** el de casación en el fondo, deducidos contra la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Acordada con el voto en contra de la ministra **señora Chevesich** quien, en lo pertinente a la ineficacia formal, estuvo por traer en relación el arbitrio, considerando que no se encuentra en ninguna de las situaciones previstas en los artículos 772 inciso segundo y 776 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, que autorizan emitir pronunciamiento en esta etapa de tramitación, de conformidad con su artículo 781.

Regístrese y devuélvase.

Nº13.315-2025





Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Gloria Chevesich R., Jessica De Lourdes González T., Ministra Suplente Dobra Francisca Lusic N. y los Abogados (as) Integrantes Maria Angelica Benavides C., Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

